



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 14 de mayo de 2026

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Ilic, Suzan Hayley y otros c/ Comisión Nacional de Valores s/ apelación de resolución de la Comisión Nacional de Valores”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los que corresponde remitirse por razones de brevedad con exclusión de la cita del dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa CPE 33008830/1997/8/1/2/RH3.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito. Remítase la queja. Notifíquese y, oportunamente, cúmplase.

Recurso de queja interpuesto por la **Comisión Nacional de Valores**, representada por la **Dra. Marcia Inés Remondegui**.

Tribunal de origen: **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I.**

RECURSO QUEJA N° 1 - ILIC, SUZAN HAYLEY Y OTROS C/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ Apelación de Resolución de la Comisión Nacional de Valores.



MONTI
Laura
Mercedes

Firmado
digitalmente por
MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2025.10.24
12:22:06 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la resolución 210/2022 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la cual se impuso a Caterpillar Financial Services Argentina S.A. (en adelante, Caterpillar) y, en forma solidaria, a sus directores titulares y miembros titulares de la comisión fiscalizadora al momento de los hechos, la multa prevista en el inc. b) del art. 132 de la ley 26.831 por infracciones a lo dispuesto en diversas normas del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades y de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y sus modificatorias) entonces vigentes.

Para así decidir, el tribunal ponderó que, desde la inspección practicada el 25 de marzo de 2015 en la sede social de Caterpillar -en la que se verificaron incumplimientos formales en los libros contables y societarios- hasta el dictado de la resolución sancionatoria, habían transcurrido más de siete años. En ese marco, destacó que el sumario se instruyó recién dos años después de la inspección, el 24 de mayo de 2017, y que los sumariados presentaron sus memoriales en julio de ese mismo año. Añadió que el dictamen final se emitió el 6 de diciembre de 2021 y la resolución sancionatoria se dictó en agosto de 2022.

Asimismo, subrayó que el objeto del sumario, referido a incumplimientos formales en los libros contables, no revestía

especial complejidad. Ponderó que no se hallaba acreditado en la causa que los sumariados hubieran obstaculizado el curso del procedimiento y que, por el contrario, los lapsos de inactividad procesal eran inequívocamente atribuibles a la CNV y habían constituido el principal motivo de la irrazonable dilación del trámite administrativo. En esa línea, destacó que el lapso de cuatro años y medio transcurrido desde que la cuestión se declaró de puro derecho -en febrero de 2018- hasta el dictado de la resolución impugnada -en agosto de 2022- resultaba enteramente atribuible a la CNV.

En virtud de lo expuesto, concluyó que, de conformidad con las pautas definidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en casos análogos, el organismo demandado había violado la garantía de los actores a ser juzgados en un plazo razonable, consagrada en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 de la Constitución Nacional, y en consecuencia revocó la resolución impugnada.

-II-

Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación en queja.

Alega que el caso suscita cuestión federal, ya que se encuentra en tela de juicio la interpretación y alcance de la ley 26.831, vigente al momento de los hechos, de naturaleza federal. Sostiene que la decisión de la cámara soslayó la aplicación de esa normativa y, con ello, anuló el ejercicio del poder de policía que la ley otorga a la CNV.

RECURSO QUEJA N° 1 - ILIC, SUZAN HAYLEY Y OTROS C/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ Apelación de Resolución de la Comisión Nacional de Valores.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Aduce que la sentencia apelada omitió valorar pautas objetivas para determinar si existió una demora excesiva e injustificada en la tramitación del sumario administrativo. Afirma que la cámara no efectuó un análisis global del procedimiento ni de los lineamientos emanados de los precedentes de la Corte, así como tampoco de lo dispuesto en el art. 135 de la ley 26.831 en materia de prescripción.

En ese orden de ideas, agrega que la decisión es arbitraria, pues se limitó a afirmar que la CNV vulneró la garantía de los actores a ser juzgados en un plazo razonable, sin ponderar que el organismo había actuado de conformidad con la normativa vigente y dentro del plazo de prescripción previsto por la ley, así como que el procedimiento bajo análisis tuvo una duración significativamente menor a la de los precedentes del máximo tribunal invocados por la cámara. En este punto, se agravia de que la cámara no consideró que, en el caso, el lapso transcurrido desde la apertura del sumario hasta su conclusión ni siquiera superó el plazo de prescripción de seis años previsto en el art. 135 de la ley 26.831.

Por tal razón, entiende que la sentencia apelada aplicó erróneamente la doctrina de la Corte establecida en el precedente "Losicer", ya que no se encuentran configurados los parámetros fijados por el Tribunal para afirmar que en el caso se produjo un exceso en el plazo razonable de duración del procedimiento. Al respecto, destaca que la actuación en sede administrativa tuvo una extensión considerablemente inferior a

la verificada en los precedentes invocados, por lo que no corresponde atribuir dilaciones indebidas.

Señala que los accionantes estuvieron sometidos a procedimiento sumarial por un período apenas superior a cinco años, y no de siete como erróneamente concluyó la cámara. En ese marco, se queja de que la decisión atacada tomó en consideración, para evaluar la razonabilidad del plazo, la etapa previa a la apertura del sumario, la que ~~sostiene~~ se desarrolló *inaudita parte* y sin irrogar perjuicios a los actores.

Por último, se agravía de que lo resuelto contraría lo establecido en el art. 135 de la ley 26.831 y que, en lo hechos, implicó una declaración de inconstitucionalidad del plazo de prescripción allí previsto, sin que mediara decisión alguna en tal sentido por la cámara.

-III-

Previo a todo, corresponde considerar en primer término el agravio planteado en el recurso extraordinario con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, pues si el recurso tiene dos fundamentos, uno de los cuales se refiere a la existencia de arbitrariedad en la sentencia, corresponde tratarlo primero. Ello es así porque, de verificarse arbitrariedad, los restantes agravios basados en la existencia de cuestión federal se tornarían abstractos en razón de la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional (arg. Fallos: [321:407](#); [322:989](#); [324:2801](#) y [339:508](#)).

RECURSO QUEJA N° 1 - ILIC, SUZAN HAYLEY Y OTROS C/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ Apelación de Resolución de la Comisión Nacional de Valores.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

-IV-

Sentado ello, y previo a pronunciarme sobre el fondo del asunto, considero necesario efectuar una breve reseña de los antecedentes del caso.

El 25 de marzo de 2015, en ejercicio del poder de policía encomendado a la CNV por la ley 26.831, el organismo efectuó una inspección en la sede social de Caterpillar, a partir de la cual detectó reiterados incumplimientos formales en los libros contables y societarios.

En ese marco, el 24 de junio de 2017 el directorio de la CNV dictó la resolución 18.722 mediante la cual ordenó instruir sumario a Caterpillar y a sus directores titulares al momento de los hechos –Suzan Gibbs, Marina Margarita del Valle Santiago Guerrero y Luis María Clancy– por presunto incumplimiento de diversas disposiciones del Código de Comercio, la ley 19.550 y las normas de la CNV. Asimismo, se instruyó sumario a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora –Javier Errecondo, Facundo Martín Goslino y Saturnino Jorge Funes– por posible incumplimiento de los arts. 294 incs. 1° y 9° de la ley 19.550, y al auditor externo Marcelo Alejandro Trama por presunta infracción a las Normas de la CNV y al Código de Ética Profesional de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Dicha decisión fue notificada a los sumariados, quienes presentaron sus respectivos descargos. Posteriormente, se celebró la audiencia preliminar el 23 de agosto de 2017, en la

cual la cuestión fue declarada de puro derecho. En esa oportunidad, se les hizo saber su facultad de presentar memorial de lo actuado, lo que finalmente no hicieron.

Por último, el 6 de diciembre de 2021 se emitió el dictamen de cierre y el 10 de agosto de 2022 la CNV dictó la resolución 210/2022 mediante la cual dispuso, en cuanto aquí interesa, imponer a Caterpillar y, en forma solidaria, a sus directores titulares y miembros titulares de la comisión fiscalizadora, la multa prevista en el inc. b) del art. 132 de la ley 26.831, por infracciones a lo dispuesto en diversas normas del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades y de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y sus modificatorias) entonces vigentes.

Esa resolución dio origen el recurso directo interpuesto por Suzan Gibbs, Marina Margarita del Valle Santiago Guerrero, Luis María Clancy, Javier Errecondo, Facundo Martín Goslino y Saturnino Jorge Funes ante la Cámara Civil y Comercial Federal, en virtud del cual ese tribunal dictó la sentencia recurrida.

-V-

Efectuada la reseña de los antecedentes relevantes, estimo que la resolución apelada no se ajusta al principio que exige que las sentencias sean fundadas y, por ende, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que debe ser descalificada con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: [326:3180](#); [329:513](#); [329:1541](#)). En especial, cuando esa Corte ha resuelto que resultan arbitrarias

RECURSO QUEJA N° 1 - ILIC, SUZAN HAYLEY Y OTROS C/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ Apelación de Resolución de la Comisión Nacional de Valores.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

las sentencias que omiten el tratamiento de cuestiones conducentes para la decisión de la litis y se sustentan en afirmaciones meramente dogmáticas (conf. Fallos: [312:1150](#); [315:1247](#), entre otros).

A mi entender, asiste razón al recurrente cuando señala que la sentencia apelada aplicó erróneamente lo resuelto por la Corte en el precedente "Lociser" (Fallos: [335:1126](#)), pues abordó la cuestión de manera dogmática, sin considerar los hechos de la causa a la luz de la normativa aplicable. En efecto, los presupuestos que se verificaron en los precedentes de la Corte citados por la cámara —en particular, en lo que respecta al tiempo que insumió el proceso, en función de su complejidad y de la conducta de las partes— difieren sustancialmente del presente caso, en el cual la dilación del trámite no aparece, por sí sola, como vulneradora del derecho de los actores a obtener una decisión en un plazo razonable. La cámara, al resolver, omitió efectuar un análisis integral de las pautas objetivas fijadas por el Tribunal —relativas a la complejidad del asunto, la conducta procesal de las partes y de la autoridad administrativa y la afectación concreta en la situación jurídica de los involucrados en el proceso— para concluir si se configuró una demora excesiva e injustificada.

Dicho esto, tengo para mí que yerra la cámara al computar el plazo desde la fecha en que el organismo efectuó la inspección en la sede social de Caterpillar, previa a la apertura del sumario. Ello es así toda vez que el derecho a

obtener una decisión en un plazo razonable debió valorarse con relación al período en que los actores estuvieron efectivamente sometidos al procedimiento sumarial, esto es, desde la resolución que dispuso su apertura hasta aquella que lo concluyó (cfr. resoluciones 18.722 del 24 de mayo de 2017 y 210/2022 del 10 de agosto de 2022, respectivamente). En el caso, la etapa previa al sumario se desplegó razonablemente por un período de dos años y no se advierte que su desarrollo hubiera irrogado cargas a los actores ni incidido negativamente sobre su situación jurídica (v. dictamen de esta Procuración General en la causa CPE 33008830/1997/8/1/2/RH3 y, más recientemente, en causa CCF 7622/2018/1/RH1).

Por otra parte, la etapa sumarial se extendió por aproximadamente cinco años y tres meses, lapso en el que los actores ejercieron plenamente su derecho de defensa, sin que se haya acreditado que los eventuales períodos de inactividad procesal atribuibles a la CNV hayan comprometido sus garantías constitucionales. Se trata incluso de un lapso inferior al término de prescripción de seis años previsto en el art. 135 de la ley 26.831. Ese dato resulta relevante, pues, si bien en el *sub lite* no se discute la prescripción de la acción, en los casos invocados por la alzada, en los que la Corte Suprema declaró vulnerado el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable, la duración de los procedimientos -a diferencia de lo que aquí sucede- superaba ampliamente el término de la prescripción. Así, en Fallos: [335:1126](#), el Tribunal concluyó que se había afectado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable en un sumario instruido por el Banco Central de la República

RECURSO QUEJA N° 1 - ILIC, SUZAN HAYLEY Y OTROS C/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ Apelación de Resolución de la Comisión Nacional de Valores.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Argentina, resuelto dieciocho años después del acaecimiento de los hechos infraccionales y quince años luego de su apertura.

En este contexto, entiendo que la cámara, sin atender a las particularidades del caso, omitió analizar de qué modo las actuaciones conducidas por la CNV contra Caterpillar y sus autoridades -desarrolladas dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable- habrían ocasionado a los actores un perjuicio grave e injustificado, hasta el punto de comprometer las garantías de defensa en juicio y de debido proceso consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional, así como el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable al que alude el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: [324:1944](#); [329:4931](#); [344:1930](#); [344:378](#); [342:584](#); [327:327](#)).

Al respecto, resulta dirimente recordar que la Corte tiene dicho que afirmar que los jueces no pueden fijar con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso, no equivale a eximirlos de profundizar y extender los argumentos de su decisión, a fin de que la valoración pueda ser examinada críticamente y de evitar que se convierta en la expresión de una pura subjetividad (cfr. Fallos [327:327](#), por remisión a la disidencia del precedente "Kipperband").

Por todo lo expuesto, cabe concluir que el pronunciamiento recurrido no satisface, sino en forma aparente, la necesidad de ser derivación del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que correspondería

atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto (Fallos: 318:1151). En consecuencia, considero que corresponde revocar la sentencia apelada, sin que resulte necesario examinar los restantes agravios del apelante, ya que deviene inoficioso frente a la solución que se propone.

En tales condiciones, estimo que corresponde hacer lugar a la presentación directa, toda vez que las garantías constitucionales que se dicen vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, según lo exige el art. 14 de la ley 48.

-VI-

Opino, por lo tanto, que cabe declarar procedentes el recurso extraordinario y la queja, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido en cuanto fue materia de agravio y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte uno nuevo.

Buenos Aires, de octubre de 2025.